José Javier Esparza

EL TERROR ROJO EN ESPAÑA

Una revisión de la Causa General



LTERA

A mis abuelos.
In *Memoriam*

Primera edición: abril de 2007
Segunda edición: mayo de 2007

ISBN: 978-84-96840-04-1

Depósito legal: B-13.350-2007

ÁLTERA
Trafalgar, 10, 2.° 1.2
08010 Barcelona

ÍNDICE

k

INTRODUCCIÓN

Los sefarditas que en 1492 decidieron emigrar de España antes que convertirse a la religión católica —aunque muchos fueron regresando—, unidos a los que se habían quedado como presuntos "conversos», no perdieron su herencia genética y silenciosamente fueron preparando la revancha.

En efecto, después de cuatro siglos lograron empezar a desacreditar a la Monarquía, trabar alianzas obreras, agitar al proletariado, sacar a "las izquierdas a las calles" y encender la esperanza de que el socialismo marxista les daría a todos un mejor nivel de vida.

Todo eso llegó al extremo de desembocar en la terrible Revolución iniciada en 1936. Los revolucionarios recibieron inmediatamente la ayuda de la Unión Soviética, consistente en el organismo de las Checas, especializadas en todas las formas del terror. Desde el saqueo hasta la tortura y la muerte.

Las Checas desmantelaron los tribunales de la Justicia y los substituyeron con cárceles de las más variadas torturas y con fusilamientos en masa.

Así fueron eliminando a miles de oficiales del Ejército, a ex-funcionarios, a presuntos "fascistas", a los "no asimilables", y se realizó le persecución religiosa jamás vista en Occidente, sólo comparable a la ocurrida durante el asentamiento del marxismo en la URSS, de 1917 en adelante.

En España fueron asesinados 13 obispos, 283 monjas y siete mil religiosos (del Clero regular y del secular), muchos de ellos torturados con odio salvaje.

Mil ciento sesenta templos quedaron gravemente destruidos y 4,668 fueron dañados, en los cuales se quemaron imágenes o se les "fusilaron".

Cuando el ministro Maura propuso que la guardia civil interviniera para frenar tales desmanes, el presidente de la República, Manuel Azaña, le contestó: "Todos los conventos de Madrid no valen la vida de un republicano".

Ya en retirada, las fuerzas republicanas fusilaban a médicos y enfermeras para que no pudieran atender a los heridos de los nacionalistas de Franco.

En fin, España vivió tres años de terror marxista. En momentos llegó a parecer que su triunfo estaba asegurado, pero se salvó gracias a la ayuda que los nacionalistas recibieron de la Alemania de Hitler y de la Italia de Mussolini.

La guerra terminó el primero de abril de 1939.

DRJOSÉ SILVEYRA
(Nacionalista español)

CAPITULO I

ARMAR AL PUEBLO

DOMINGO 19 de julio de 1936: José Giral, recién nombrado presidente del Gobierno de la II República, autoriza el reparto de armas al pueblo. El «pueblo» son las milicias organizadas por los partidos del Frente Popular: socialistas, comunistas anarquistas. Para obtener un fusil no se precisa más requisito que exhibir la documentación de un partido o sindicato de izquierdas[1] o, incluso, manifestarse simplemente simpatizante. Miles de activistas políticos se encuentran así súbitamente dotados por el propio Gobierno de armas, es decir, de poder. El objetivo de la medida es defender a la República contra la sublevación militar que desde la tarde del 17 de julio viene extendiéndose, a partir de Melilla, por todo el territorio nacional. Las armas, en efecto, servirán para eso. Pero «defender la República», para los partidos de izquierda, equivale a desencadenar la revolución. Y junto a la revolución se desatará el Terror. Ese mismo día, en Madrid, milicianos armados disparan contra los feligreses que salen de misa en la iglesia del Rosario de los padres Dominicos, calle Torrijos, causando un número indeterminado de muertos y heridos. Entre los tiroteados están los hermanos Serrano Súñer, que han acudido al funeral de su padre. Prácticamente al mismo tiempo, en el pueblo pacense de Fuente

Defenderkr la República equivale, para las izquierdas, a desencadenar la revolución

1. **Tagiieña, Manuel:** *Testimonio de dos guerras,* **México, 1974, p. 104.**

de Cantos los milicianos capturan a cincuenta seis personas sospechosas de simpatizar con la sublevación militar (entre ellas, dos mujeres y dos nifios), las encierran en la iglesia e incendian el templo: doce personas mueren abrasadas; el resto logrará huir'.

No son los primeros crímenes de la guerra civil. De hecho, es dificil saber quién fue la primera víctima del Terror rojo. Porque, además, no ha hecho falta que estalle la guerra y se arme al «pueblo» para que comience la caza. Ésta ha empezado tiempo atrás. El 15 de julio, el líder derechista Gil Robles había enunciado en las Cortes los datos de la violencia política desde el mes anterior: 61 muertos, 224 heridos, 74 bombas. Los grupos armados de la izquierda han desatado ya numerosas acciones revolucionarias y se han batido a fuego, a veces contra grupos de la derecha, pero en no pocas ocasiones entre sí mismos. Desde e116 de febrero, día de la victoria del Frente Popular, el número de asesinatos políticos alcanzaba las 330 personas en apenas cinco meses. La guerra civil estaba ya en las calles antes de que se inauguraran los frentes de batalla. El reparto de armas hará irreversible el camino.

El Gobierno de la República dudó antes de tomar semejante medida; dudó mucho. Los socialistas llevaban días pidiendo insistentemente «armar al pueblo», es decir, a sus militantes; al menos, desde el asesinato de Calvo Sotelo, secuestrado y muerto el 13 de julio por policías socialistas. Aunque, en realidad, la petición de armas era una constante desde 1931, cuando Largo Caballero las exigió para subrayar la atmósfera revolucionaria creada por la primera quema de conventos, en las semanas iniciales de la II República. Una vieja exigencia, pues. Los socialistas siempre habían estado seguros de que podrían controlar al «pueblo» —y guiar la revolución. Así se lo afirmó Vidarte, comisionado por el PSOE para ese fin, al presidente del Gobierno. A nadie parecía preocuparle la eventualidad de que el armamento de las milicias se tradujera en una caza indiscriminada de enemigos en la retaguardia. Lo que les preocupaba era la revo-

1. Este episodio ha sido objeto de un estudio pormenorizado por Manuel Martín Lobo: La *represión roja del 1 9 de julio en Fuente de Cantos,* presentado como ponencia en el II Congreso Internacional «La República y la guerra civil», Universidad CEU-San Pablo, Madrid, 22-24 noviembre 2006.

lución: a los socialistas les preocupaba desencadenarla; al Gobierno de la República, impedirla.

Las izquierdas en la calle

Retrocedamos al 17 de julio, cuando empiezan a llegar desde Melilla las primeras noticias de la sublevación militar. Son las cuatro y veinte de la tarde de un viernes de verano. El Gobierno, que en ese momento preside Casares Quiroga, está desconcertado. Al desconcierto contribuye de manera particular la estrategia ideada por el coordinador de los rebeldes, el general Mola, que prevé un escalonamiento de sublevaciones en distintos puntos de España. Es el día 18 cuando el Gobierno entiende que se halla ante un alzamiento de amplia extensión, que aún cobrará mayores dimensiones en las jornadas siguientes. Desde la misma tarde del día 17, las calles de Madrid han empezado a llenarse de militantes de los partidos revolucionarios: desde la plaza de Cibeles, calle de Alcalá arriba, pasando por la Puerta del Sol y hasta el Palacio Real —llamado entonces Palacio Nacional—, sede del Ejecutivo, la muchedumbre hierve. La tesitura es delicadísima: toda esa multitud pertenece a los partidos que apoyan al Gobierno del Frente Popular, pero el gabinete está exclusivamente conformado por la minoría moderada, los republicanos de Azaña, el presidente de la República. Desde las elecciones del 16 de febrero, cuyos resultados habían sido objeto de distorsiones sin cuento[1], todo el empeño del Ejecutivo ha sido mantener el poder sin ceder a las presiones revolucionarias de sus coaligados del Frente Popular y, al mismo

1. Los resultados electorales de 1936 son todavía hoy un enigma. Distintos autores han intentado una aproximación a lo que pudieron *ser las cifras* reales. En general, se coincide en señalar una leve ventaja para el Frente Popular sobre el bloque de las derechas. Pero ese resultado fue distorsionado, primero, por la ley electoral; después, por las manipulaciones en la segunda vuelta y, finalmente, por las brutales arbitrariedades en la Comisión de Actas de las Cortes —que escandalizaron al mismísimo Indalecio Prieto—, hasta otorgar al Frente Popular una amplia mayoría completamente irreal. Hay un detallado y objetivo estudio sobre este asunto en J. A. Navarro Gisbert: *¿Por qué fracasó la II República?,* Altera, Barcelona, 2006, p. 502 y *ss.* para los resultados, pp. 546 y *ss.* para la discusión de las actas.

tiempo, concediéndoles pequeñas satisfacciones. Pero el poder en las Cortes y, sobre todo, en la calle no corresponde a la minoría republicana de izquierdas, sino precisamente a los partidos revolucionarios, y especialmente al Partido Socialista (marxista) Obrero Español'. El Gobierno no sabe si la multitud que invade las calles quiere respaldar al Ejecutivo o si, al revés, pretende ejecutar la prometida revolución.

Esa es la situación que tiene que afrontar Casares Quiroga. Durante veinticuatro horas, los socialistas le piden armas reiteradamente. Él se niega una y otra vez. Difícil trago para quien hasta entonces no había dado especiales muestras de talento ni de firmeza. Santiago Casares Quiroga, republicano galleguista, había llegado a la presidencia del Gobierno en mayo de 1936, fruto casual de una maniobra patrocinada por el ala más izquierdista del PSOE. No es que las huestes de Largo Caballero quisieran a Casares en la presidencia; lo que querían era un Gobierno débil que se doblegara ante la fuerza socialista'. Por eso estaba él allí: amigo personal de Azaña y varias

---

1. En unas Cortes de 473 diputados, el PSOE tenía 99 escaños y el Partido Comunista 17; los grupos principales del azañismo, que eran la Izquierda Republicana del propio Azaña y la Unión Republicana de Martínez Barrio, tenían 87 y 38, respectivamente. Los azañistas sabían que no podían gobernar sin la anuencia de socialistas y comunistas; pero, sobre todo, sabían que el poder real en la calle y en los sindicatos pertenecía al PSOE e incluso a los anarquistas de la CNT, que no se habían presentado a las elecciones ni habían formado parte del Frente Popular, pero que habían pedido el voto para la coalición de izquierdas.

2. Vale la pena explicar la componenda, para entender la posición de Casares y la fragilidad del Frente Popular ante los partidos revolucionarios. La maniobra se la reveló el socialista Araquistain a Juan Marichal. Tras las elecciones del 36, los sectores más radicales de la izquierda creen llegada la hora de la revancha, la violencia en las calles llega a extremos insostenibles y las personalidades más templadas del Frente Popular temen que la situación escape a su control. En esa tesitura, Azaña y el socialista Indalecio Prieto se proponen pactar una solución «moderada», con el primero en la presidencia de la República y el segundo en la del Gobierno. Pero eso representaba un duro golpe para el ala «bolchevique» del PSOE, agrupada en torno a Largo Caballero, «el Lenin español», que desde enero de 1934 venía predicando un régimen socialista al estilo soviético y que apostaba por un Gobierno republicano débil, sobre el cual podría ejercer la presión de su fuerza política y sindical; una presión que no podría hacer con un socialista de la talla de Prieto en la cabeza del Gobierno. De manera que los «bolcheviques» se las arreglaron para que Azaña fuera, en efecto, a la cúspide del Estado, más ornamental que ejecutiva, pero cegaron el camino de Prieto hacia la jefatura del Gobierno. Para ese puesto sólo aceptaron a un presidente de la talla —exigua— de Casares.

veces ministro desde 1931, pero de escaso peso político y, además, seriamente minado por una tuberculosis que le hacía alternar periodos de energía con otros de profunda depresión. Casares sacó adelante el estatuto de autonomía de Galicia, y no sin sospechas de fraude. Hizo poco más. Sectario y beligerante, demostró una debilidad pasmosa a la hora de atajar las enormes violencias que sacudieron el país durante la trágica primavera de 1936. Él fue quien amenazó al dirigente de la oposición de derechas, José Calvo Sotelo, el 16 de junio en las Cortes; él dirigía el Gobierno el 13 de julio, cuando Calvo Sotelo fue secuestrado y asesinado por un comando policial procomunista. Pero en esos días previos a la guerra, Casares se negó a «armar al pueblo».

¿Por qué se negaba Casares? Los socialistas estaban pidiendo armas para sus milicianos desde el mismo 13 de julio: todos pensaban que el asesinato de Calvo Sotelo iba a provocar una insurrección militar. No les faltaba razón. La misma advertencia estaban haciendo los militares de la Unión Militar Republicana An tifascista, la UMRA, dominada por el PSOE y cuya mano, por cierto, aparece claramente tras el complot contra Calvo Sotelo[1]. Pero Casares se resistía. Pensaba tenerlo todo bajo control. De hecho, en los meses anteriores había reestructurado a fondo las fuerzas de orden público, para garantizarse su fidelidad. Y con la Guardia de Asalto y la Guardia Civil bajo control, ¿para qué entregar armas a los partidos de izquierda, con el consiguiente riesgo de un movimiento revolucionario que diera al traste con la

Era más práctico esperar a que todos insurrectos dieran la cara, para que no escapara ninguno

1. Las fuentes republicanas siempre sostendrán que el asesinato de Calvo Sotelo fue una venganza por el asesinato, el día anterior, del teniente de la Guardia de Asalto José del Castillo. El teniente Castillo, que provenía del Ejército y se había significado por su proximidad al PSOE, era miembro de la UMRA e instructor de las milicias de las Juventudes Socialistas. Castillo fue asesinado por elementos carlistas del Tercio de Madrid que, a su vez, vengaban así los disparos efectuados contra los manifestantes de derechas en el entierro del alférez Reyes, el 16 de abril; en aquellos incidentes los hombres de Castillo mataron a Andrés Sáenz de Heredia, primo de José Antonio Primo de Rivera, yel propio Castillo hirió al militante requeté José Llaguno Acha. Tras aquellos sucesos, Castillo fue destinado a la guardia personal de Martínez Barrio.

República misma? Era más práctico esperar a que todos los militares insurrectos dieran la cara, para que no escapara ninguno. La disyuntiva que tenía frente a sí el orden republicano se resumía en una doble amenaza: a un lado, la conspiración militar; al otro, la conspiración revolucionaria, con el relevante matiz de que los revolucionarios eran socios del Gobierno. Todavía en la misma mañana del 18 de julio, con la sublevación militar ya en marcha, una comisión de diputados socialistas insiste en la petición de armas'. Y Casares es explícito: la situación está controlada; por tanto, no hay armas. Según fuentes muy directas, Casares no hacía sino seguir las indicaciones estrictas de Azaña: era el presidente de la República quien estaba ordenando taxativamente que no hu hiera armas para los revolucionarios, aunque Casares sí era partidario de entregarlas[2]. ¿A qué temía Azaña? Evidentemente, a la revolución.

La decisión de Azaña

El temor de Azaña a una revolución socialista o anarquista era perfectamente comprensible. El PSOE de Largo Caballero no había ocultado nunca que sólo esperaba una oportunidad para lanzarse a la arena. «La clase trabajadora tiene que hacer la revolución —había proclamado Largo el 2 de febrero de 1936 en Valencia—. Si no nos dejan, iremos a la guerra civil. Cuando nos lancemos por segunda vez a la calle, que no nos hablen de generosidad y que no nos culpen si los excesos de la revolución se extreman hasta el punto de no respetar cosas ni personas». Los comunistas y los anarquistas no estaban, evidentemente, en distinta posición. Y los azañistas eran perfectamente conscientes de la amenaza. El periódico *Política*, órga-

1. Lo cuenta el propio Juan Simeón Vidarte en sus memorias: *Todosfitimos culpables* Fondo de Cultura Económica, México, 1973

2. Eso *es* lo que sostienen las memorias del predecesor de Casares en la presidencia del Gobierno, Manuel Portela Valladares: *Memorias dentro del drama español* Alianza, Madrid, 1988, y las de la hija del propio Casares, la actriz María Casares: *Residente privilegiada,* Argos-Vergara, Barcelona, 1981.

no del partido gubernamental Izquierda Republicana, escribía el 28 de junio: «Quien quiera tomar el Poder contra el pueblo ha de disputárselo en la calle al Gobierno legítimo. Yen la calle se encontrará frente al pueblo. Frente a todo el pueblo, porque el Ejército, en su entraña, también lo es ». Era una advertencia a dos bandas.

Quizás Azaña recordara en esos momentos, ante la revolución inevitable, sus propias palabras en noviembre de 1930, en el Ateneo de Madrid, cuando anunciaba «la gran renovación y trastorno necesitados por la sociedad española». Había que romper con la trayectoria histórica de España —sostenía Azaña—, porque «España es víctima de una doctrina elaborada hace cuatro siglos en defensa y propaganda de la Monarquía católica imperialista, sobrepuesta con el rigor de las armas al impulso espontáneo del pueblo». Así la República aún nonata señalaba su triple enemigo: Corona, Iglesia, Ejército, que deberían ser triturados por «los gruesos batallones populares, encauzados al objetivo que la inteligencia les señale».[1] La inteligencia era, por supuesto, el propio Azaña: «La obligación de la inteligencia, constituida, digámoslo así, en vasta empresa de demoliciones, consiste en buscar brazos donde los hay: brazos del hombre natural, en la bárbara robustez de su instinto elevado a la tercera potencia a fuerza de injusticias». Azaña, y como él muchos otros republicanos de izquierda, se veía a sí mismo como un nuevo Robespierre que enseña a los *sans-culottes* el camino de la libertad: «En el ápice del poderío, más aire me hubiese dado a Robespierre que a Marco Aurelio», dice en sus *Memorias*. Pero he aquí que ahora el «hombre natural en la bárbara robustez de su instinto» pugnaba por emanciparse de la «inteligencia», desdeñando a un Robespierre incapaz de dar el último paso hacia la revolución de verdad.

El último intento de Azaña fue una solución masónica: quitar de en medio a Casares, completamente superado por los acontecimientos, y encargar el Gobierno al presidente de las Cortes, Martínez Barrio, republicano anticlerical y masón, pero conservador, para tratar de llegar un acuerdo *in extremis* con los sublevados. Martínez Barrio llegará a hablar con Mola[2]. Inútilmente: ya es imposible dar

1. Excluye a la Corona inglesa por no ser de origen católico.

2. Martínez Barrio da su propia versión en sus *Memorias*, Planeta, Barcelona, 1983, pp. 363 y ss.

marcha atrás. Pero lo es para todos: los militares de la UMRA llevan horas repartiendo subrepticiamente algunas armas a los socialistas en Madrid y otras ciudades. En esos mismos militares confían los socialistas para encuadrar a los milicianos y convertirlos en un «ejército democrático». El Gobierno Martínez Barrio apenas durará tres horas; su titular huirá hacia Valencia para escapar de las iras de los revolucionarios, que se han enterado del intento de pacto y lo consideran una traición.

Cerrada la vía negociadora, Azaña se siente incapaz de aguantar la presión socialista. Es entonces cuando da carta blanca al reparto de armas. Un distinguido político republicano, Ramón Feced Gresa, lo contará después de la guerra a los instructores de la *Causa General*[1] En el Palacio Nacional se reúnen Azaña, Martínez Barrio —que aún no ha escapado—, los socialistas Largo Caballero e Indalecio Prieto y los ministros republicanos Antonio de Lara, Augusto de Barcia y Felipe Sánchez-Román. Largo Caballero pide una vez más que se arme al «pueblo». Azaña, quizá devuelto a la atmósfera de su discurso ateneísta de 1930, decide entonces que «las teorías, sin masas, no tienen valor». En el rostro de Largo Caballero se dibuja una intensa expresión de satisfacción y triunfo. Algunos republicanos moderados —como Sánchez Román— rehúsan apoyar la medida y salen del Gobierno. La tarea recaerá en otro amigo personal de Azaña, José Giral. Él será quien tome la drástica decisión.

Las milicias ya estaban armadas

Que Giral armó a las milicias de los partidos de izquierda es un hecho. Pero hay otros dos hechos que conviene apresurarse a subrayar para ceñir en su justo lugar las responsabilidades por esta decisión. El primero: que esos mismos partidos poseían ya grupos armados y con-

---

1. Ramón Feced Gresa (1894-1959) pertenecía al Partido Nacional Republicano de Sánchez Román, uno de los pequeños grupos burgueses que surtían de elites ala II República. Era diputado desde 1931 y había sido ministro de Agricultura tanto con Lerroux como con Martínez Barrio. Permaneció en España tras la guerra. Morirá en Mataró en 1959.

trolaban alijos de armas fuera del control oficial. El segundo: que los partidos revolucionarios estaban recibiendo armas desde varias horas, acaso varios días antes de que Giral lo ordenara. La decisión del Gobierno significó un espaldarazo oficial, formal, institucional a la estrategia subversiva de la izquierda, pero el armamento de las milicias ya era una realidad.

Dos ejemplos. En Oviedo, los milicianos movilizarán entre tres mil y cuatro mil fusiles *antes* de la orden de Giral. Y al mismo tiempo los anarquistas, en Madrid y otras ciudades, se hacen con varios centenares de armas de fuego largas y cortas. ¿De dónde han salido esas armas? De los depósitos escondidos desde la revolución de 1934. Depósitos que no debían de ser desdeñables, dado el intensísimo tráfico de armas que conoció España durante la II República.

En los años republicanos hubo, al menos, tres grandes movimientos irregulares de armas. Uno, en 1931, fue la venta de armas a un grupo revolucionario portugués para promover un golpe en el país vecino; por este asunto se encausó algunos años más tarde a Azaña y a Casares Quiroga, que fueron sin embargo absueltos. Siempre se sospechó que esas armas terminaron engrosando el arsenal de la revolución de 1934, y así lo confirmaría mucho tiempo después Indalecio Prieto[1]. Este de 1934 es el segundo gran movimiento de armas, con la importante precisión de que el tráfico comenzó mucho antes de la revolución: además del alijo «portugués», los insurrectos contaron con abundantes pistolas procedentes de Francia y Bélgica,

En los años treinta hubo, al menos, tres grandes movimientos irregulares de armas

1. Prieto, en efecto, detalla que los conspiradores portugueses compraron un partida de armas al Servicio de Industrias Militares del Ministerio de la Guerra, cartera que en ese momento desempeñaba Azaña. El material no llegó a manos portuguesas porque no se pagó, de manera que la armas quedaron almacenadas en Cádiz. En 1934, los organizadores (socialistas) de la revolución de Asturias negociaron con los portugueses, que cedieron el material y fue transportado en el buque *Turquesa.* Cf. Indalecio Prieto: *Convulsiones de España, I,* México, Oasis, 1967, p. 109. La responsabilidad de Azaña, de la que nadie dudó nunca, pero que ha sido pertinazmente silenciada por la memoria oficial, ha quedado claramente de relieve tras los trabajos de Pío Moa: *Los orígenes de la guerra civil,* op. cit.

y también con armas cortas «despistadas» de las fábricas de Eibar a través de una compleja red creada al efecto por las Juventudes Socialistas y el sindicato del Transporte de la UGT. En los meses previos a la revolución, en la prensa de izquierda en general, y de la Esquerra catalana en particular, era habitual ver anuncios de empresas vascas que ofrecían armas cortas y largas «a buen precio y con facilidades de pago». Por último, el tercer movimiento irregular de armas parece haber sido constante en el tiempo, un goteo alimentado desde las propias instituciones oficiales, de ejecución discreta, pero del que tenemos suficiente noticia por las memorias de los propios líderes republicanos. El presidente Niceto Alcalá Zamora, por ejemplo, cuenta que el socialista Araquistain, en la época en que fue embajador en Alemania (febrero de 1932 a mayo de 1933), adquirió gran número de armas automáticas y las hizo transportar a depósitos clandestinos en toda España, operación para la que contó con el apoyo de la propia policía. El mismo don Niceto nos refiere que la Dirección General de Seguridad, en la época en que la gestionó Manuel Andrés Casaus[i], amigo de Prieto, tuvo por costumbre regalar a los socialistas pistolas y revólveres procedentes de cacheos, registros y decomisos de la policía.

Para dar una idea de la intensidad de aquel tráfico ilegal de armas, consignemos el arsenal aprehendido por la policía en junio de 1934 —antes de la revolución— y dirigido a un diputado socialista: 616 pistolas y 80.000 cartuchos, más otras 54 pistolas halladas en el domicilio del diputado en cuestión. Después, entre 1935 y1936, las milicias del PSOE y el PCE desfilarán en los mítines con ostentosa exhibición de armamento. No puede extrañar, pues, que los partidos

1. Manuel Andrés Casaus, de San Sebastián, fundó el Comité Nacional de Acción Republicana y tuvo una importante participación en la conspiración republicana de 1930. Llegó a la Dirección General de Seguridad para tapar el escándalo por la matanza de Casasviejas, tarea que acometió por la expeditiva vía de amenazar a los guardias que, obedeciendo órdenes, la provocaron. Casaus fue asesinado el 10 de agosto de 1934 en San Sebastián, al parecer por elementos falangistas. Durante la guerra, un batallón de milicianos de Izquierda Republicana llevará su nombre; también se los conocía como «Balas rojas».

revolucionarios estuvieran en condiciones de movilizar gran número de armas sin necesidad de que el Gobierno diera orden alguna.

La UMRA lleva la voz cantante

Pero una cosa es hacer acopio de armas para un golpe de mano revolucionario y otra, muy distinta, proveer de armamento a decenas de miles de personas con vistas a una guerra civil. Y aquí es donde entra la Unión Militar Republicana Antifascista, la UMRA, donde se agrupaban los elementos más izquierdistas del Ejército. La UMRA, que recogía la herencia de la Agrupación Militar Republicana de los arios veinte, había nacido formalmente bajo el nombre de Unión Militar Republicana a finales de 1934, como reacción contra la Unión Militar Española (UME), asociación castrense de signo conservador. Después recibió la incorporación de la Unión Militar Antifascista, promovida por el Partido Comunista, y de la fusión nació la denominación de UMRA. Pronto se convirtió en la plataforma militar del poder republicano. Su principal promotor fue el entonces capitán Eleuterio Díaz Tendero, socialista bolchevizante, y estaba integrada fundamentalmente por militares de procedencia masónica y socialista. En la guerra larvada que se desató en España desde las elecciones de febrero de 1936, los militares de la UMRA desempeñaron un papel crucial en la instrucción de milicias revolucionarias. En el paisaje de esos meses, que podemos definir como un creciente intercambio de provocaciones, la UMRA se asignó por tarea identificar a los militares de la UME para neutralizarlos cuando llegara el momento'.

La UMRA se asignó por tarea identificar a los militares de la UME para neutralizarlos

Bajo la sugestión comunista, la UMRA estaba convencida de que los elementos conservadores preparaban un golpe de Estado dirigi-

1. Sin embargo, los dos militares más relevantes del bando republicano durante la guerra no serán hombres de la UM RA, sino de la UME: Miaja y Rojo.

do nada menos que por el nacionalsocialismo alemán. Así lo cuenta el comunista Modesto, enlace entre la UMRA y el PCE[1]. A Modesto debemos también el relato de cómo se preparó el armamento de las milicias varios días antes de que estallase la guerra civil:

> Al día siguiente del asesinato del teniente Castillo, promovimos una reunión a la que asistieron los dirigentes de las células del partido del Segundo Grupo de Asalto (Ministerio de la Gobernación), del Ministerio de la Guerra, del Ministerio de Marina y del Batallón Presidencial, reunión que se celebró en el domicilio del teniente coronel José Barceló, sito en la calle Vallehermoso. A esta reunión asistió, en vísperas de incorporarse a su destino en África, el capitán de aviación Leret, uno de nuestros camaradas militares más lúcidos, asesinado por los militares franquistas el 18 de julio en la base de hidros de Atalayón. En esta reunión de particular tensión, los camaradas Barceló, ayudante de Casares Quiroga y jefe del batallón del Ministerio de la Guerra; Enciso, jefe del Batallón Presidencial; Burillo, del Grupo de Asalto, y la célula del Ministerio de la Marina expresaron su indignación por los crímenes de los militares fascistas y la necesidad de extremar la vigilancia para salvar a la República en peligro. En aquella reunión se trazó la línea de conducta a seguir con vistas a que no pudieran sorprendernos los acontecimientos en los ministerios y en las unidades. En este periodo, en nombre del partido, yo estaba relacionado con el coronel Rodrigo Gil Ruiz, jefe del Parque de Artillería de Madrid, socialista. En vísperas de la sublevación y ante la eventualidad de que los fascistas intentaran apoderarse de las armas del Parque y se produjera un golpe fascista, fijamos ambos la consigna «Modesto» para la entrega de las armas.

1. *Soy del Quinto Regimiento,* Laia, Barcelona, 1978. Juan Modesto Guilloto (1906-1969) había ingresado en el PCE en 1930. Tras recibir un curso de instrucción militar en la Unión Soviética, desde 1933 se encarga de organizar las milicias comunistas. Al estallar la guerra creó el Quinto Regimiento comunista. Fue el único oficial de milicias que alcanzó el generalato. Tras la guerra civil pasó a la URSS, ingresó como general en el ejército soviético y durante la segunda guerra mundial mandó unidades del ejército comunista búlgaro. Desplazado en las luchas por controlar el PCE, terminó retirándose en Praga, donde murió.

Golpe de mano sobre el Ministerio de la Guerra

Para «salvar la República», como dice Modesto, el general de artillería de la Armada Francisco Matz, subsecretario del Ministerio de Marina, asistido por el oficial de transmisiones Balboa, organiza desde el 15 de julio las comunicaciones por radiotelégrafo para que sólo sean conocidas por los marinos afectos al Frente Popular. ¿Lógica prevención ante un golpe de Estado? Sin duda. Pero ocurre que entre las instrucciones cursadas desde el Ministerio a los marinos figura aquella de que no pierdan de vista a sus jefes pues están

/

«todos ellos complicados en la traición». ***Alrededor de50%***
La marinería, muy infiltrada por los par- ***de los oficiales***
tidos revolucionarios, se hace con el con-

zona
de en

trol de las naves y apresa a los mandos. En ***republicana fue ejecutado ecutado***
pocas semanas los oficiales de la Armada serán aniquilados. Alrededor del 50% de los oficiales de la Marina en zona republicana serán ejecutados por el Frente Popular a lo largo de la guerra, especialmente en Cartagena y Málaga'. El 31 de julio de 1936, en Cartagena, son asesinados dos oficiales a bordo del buque *Cervantes.* El 3 de agosto, tres en el *Libertad* El día 7, catorce de nuevo en el *Cervantes.* El 10 de agosto, diez en el *Jaime 1.* La mayor matanza se produce en Cartagena a partir del 14 de agosto, cuando son asesinados, arrojándolos al mar, ochenta y un oficiales de la Armada presos en los barcos *España n°* 3 y *Sil.* El 21 de agosto, en Málaga, son fusilados once jefes y oficiales de los destructores *Churruca* y *Sánchez Barcáiztegui.* También en Málaga, el 20 de septiembre, son fusilados treinta y seis marinos. Todavía el 7 de marzo de 1939, cuando quedaban pocos días para el fin de la guerra, se asesinará en Cartagena a varias decenas de marinos sublevados. La cifra de oficiales de marina asesinados sólo en Cartagena a lo largo de la guerra asciende a 131 víctimas. El cómputo total de asesinatos ascien-

1. La fuente esencial para la historia de la Armada española durante la guerra civil es la obra de Ricardo Cerezo, *Armada española siglo xx,* Eds. Poniente, Madrid, 1983, vol. 11

de a 255 mandos del Cuerpo General de la Armada; la plantilla total, el 17 de julio, era de 721 personas.

Matz será elevado al cargo de ministro de la Marina. Y el responsable directo de aquellas órdenes, Benjamín Balboa, oficial 3° del cuerpo de auxiliares de la Armada, será nombrado subsecretario de Marina por el propio Matz y confirmado por Indalecio Prieto. También para «salvar la República», el 17 de julio, Matz desplaza a los mandos naturales de la Armada y se hace con el control del ministerio, apoyado por un comité de la UMRA que encabeza el comandante de infantería de marinaAmbrosio Ristori; éste será igualmente recompensado con el cargo de ayudante de Giral, antes de morir ese mismo otoño en los combates de la sierra madrileña.

La operación se repite en el Ministerio de Guerra: los tenientes coroneles de Artillería Hernández Saravia —viejo amigo y colaborador de Azaña— y Rodrigo Gil, apoyados en los elementos de la UMRA, rompen la cadena de mando y ocupan los puestos decisivos de la estructura militar'. Se trata de garantizar la fidelidad de las fuerzas armadas ante el alzamiento. Pero en el mismo acto entra otro militar de la UMRA, el mencionado Díaz-Tendero, ya comandante, que se entrega a una cruenta tarea de depuración'. Como ha ocurrido en el caso de la Armada, la represión sobre los oficiales de la Ejército en la zona republicana será brutal. En algunos casos, las ejecuciones podrán justificarse desde los usos de la justicia militar, pues se aplicaron sobre militares que, desde el punto de vista del Frente Popular, estaban incursos en delito de sedición o rebelión; también las autoridades militares del bando nacional aplicarán estos supuestos. Asimismo, en ambos bandos se darán situaciones de militares

1. Ambos serán también recompensados. Hernández Saravia será nombrado ministro de la Guerra pocos días después, el 6 de agosto. Rodrigo Gil será elevado a subsecretario de la Guerra por Largo Caballero, en septiembre.

2. Eleuterio Díaz Tendero (1882-1945), de origen socialista, ya era considerado entonces como abiertamente procomunista. Durante toda la guerra ocupará puestos del mismo carácter: jefe de personal, jefe de información y control, directivo del Servicio de Información Militar. Se permitió criticar a Largo Caballero cuando éste presidía el Gobierno. Fue detenido por ello, pero los comunistas presionaron para que se le devolviera a su puesto. Exiliado tras la guerra, fue apresado en Francia por los alemanes e internado en el campo de concentración de Dachau, donde murió.

que, antes que entrar a formar bajo la bandera enemiga, preferirán el fusilamiento. Pero en innumerables casos, dentro del campo republicano, el Terror sobre los militares prescindirá de los usos del código militar para adoptar la forma de un «Terror de clase» que condenaba de antemano a los militares de cualquier graduación por el hecho de serlo, y ello aunque no hubieran secundado la sublevación.

Será la UMRA, en fin, la que comience a repartir armas entre las milicias contra las órdenes del Gobierno. Es uno de los principales implicados en la operación, el diputado socialista Juan Simeón Vidarte, quien relata cómo Barceló le entregó el día 18 en el Ministerio de la Guerra un millar de pistolas reglamentaras, con su munición, que fue a parar ala Casa del Pueblo del PSOE en la calle Piamonte. Barceló era una de los conjurados, según el relato de Modesto[1]. Desde los cuarteles de Campamento y desde el Ministerio de Gobernación se preparan entregas similares. Pero no se trata sólo de Madrid: en Sevilla, donde el gobernador civil acata las órdenes de Casares y se resiste a entregar las armas, los oficiales de la Guardia de Asalto distribuyen fusiles y mosquetones entre las milicias; esos oficiales eran de la UMRA. Cuando Giral dé finalmente la orden, los militares de la UMRA se encargarán de cumplirla con rapidez. En Madrid, Rodrigo Gil reparte a las milicias cinco mil fusiles completos y otros muchos sin cerrojo. ¿Dónde están los cerrojos? En el Cuartel de la Montaña. Pero en éste se han recluido militares partidarios del alzamiento. Gil, artillero, recurre a los grandes medios: no entrega sólo fusiles, sino también un obús de 155 milímetros; hay que batir el Cuartel de la Montaña.

Un millar de pistolas acabó en la Casa del Pueblo del PSOE en la calle de Piamonte

Hay historias parecidas en todos los puntos de España que permanecieron bajo el control del Frente Popular: las autoridades

1. Afiliado al Partido Comunista, Luis Barceló (1896-1939) se encargó durante la guerra del reclutamiento e instrucción de las milicias y mandó tropas en el Guadarrama. En 1939, cuando el Gobierno del Frente Popular se quebró por el golpe del coronel Casado, Barceló se opuso a éste y asumió por su cuenta el mando del Ejército del Centro. Fue

—en general, los gobernadores civiles— arman a las milicias y éstas, armadas, imponen a tiros su propia autoridad, con la anuencia o sin ella del poder legal. Inversamente, allá donde los militares sublevados logren frustrar el armamento de las milicias, la rebelión triunfará. En Toledo fue el diputado socialista Prats quien se presentó en el Gobierno civil reclamando las armas de la Academia militar y de los guardias civiles; como es sabido, éstos se negaron y se encerraron en el Alcázar. Otras veces los gobernadores civiles delegarán la orden en las autoridades militares, con resultados no siempre óptimos. En Granada, los oficiales del Ejército, la Guardia Civil y la Guardia de Asalto, implicados en el alzamiento, desobedecieron las órdenes del general Campíns, rehusaron entregar las armas a las milicias —que, de hecho, ya estaban armadas— y terminarán haciéndose con la ciudad. En Asturias, el comandante militar, Aranda (entonces coronel, luego general), secretamente implicado en el Alzamiento, utilizará el armamento de las milicias como argucia para alejar a dos mil milicianos: les facilitó algunas armas y puso a su disposición un tren que les llevó hasta Madrid; así se libró Aranda del grueso de sus enemigos. En Málaga, por el contrario, la entrega de armas tuvo el aspecto de un motín: los soldados, auxiliados por milicianos, detuvieron y fusilaron a los jefes y oficiales.

Matanzas de militares

A partir de ese momento se encadenan sucesos donde se hace imposible distinguir entre el combate contra las fuerzas sublevadas y la represión «de clase» contra el estamento militar. Ya hemos visto la matanza entre los cuadros de la Armada. Volvamos a Madrid. Es el 20 de julio. Desde el día anterior, las milicias de los partidos y sindicatos de izquierda, dirigidas por los militares de la UMRA, asedian los cuarteles donde el Ejército guarda las armas. Algunos de ellos se han puesto del lado de los rebeldes. El de la Montaña no es el único; también están Getafe y Campamento. Ninguno de esos puntos resistirá. Y cuando las fuerzas militares y paramilitares del Frente Popular consigan vencer la resistencia de las unidades suble-

vadas, aniquilarán a buen número de militares rendidos y desarmados. En Getafe son ejecutados un capitán médico, un teniente de Artillería y un suboficial. En el regimiento de Wad Ras se ejecuta a siete militares, de los cuales seis eran soldados rasos. Otros cinco soldados rasos se cuentan entre los veintiocho asesinados de Campamento. Pero la mayor matanza tendrá lugar en el Cuartel de la Montaña: cuando los sublevados se rindan, los milicianos los aniquilarán sin mediar ninguna otra consideración. El número de muertos superará los 500; de ellos, se estima que la cifra de prisioneros asesinados tras la rendición es superior a 130. Sobre el carácter extremadamente cruento de aquella acción ha quedado el testimonio de uno de sus protagonistas: el comunista Enrique Castro Delgado, creador del Quinto Regimiento de Milicias. Así lo explica en un célebre pasaje de su libro *Hombres* made in *Moscú:*

> Ya dentro del Cuartel, alguien dice: «Allí» están los que no han escapado, serios, lívidos, rígidos... Castro sonríe al recordar la «fórmula». «Matar..., matar, seguir matando hasta que el cansancio impida matar más... Después... Después construir el socialismo.» [...] Que salgan en filas y se vayan colocando junto a aquella pared de enfrente, y que se queden allí de cara a la pared... ¡Daros prisa! La fórmula se convirtió en síntesis de aquella hora..., luego un disparo..., luego muchos disparos... La fórmula se había aplicado con una exactitud casi maravillosa.» [1]

Esto ocurría en Madrid, pero la situación no será distinta en otros lugares. Es el caso de Barcelona. Aquí los sublevados han terminado rindiéndose a la Guardia Civil —no a los milicianos— tras unas pocas horas de lucha. Los últimos rebeldes se habían refugiado en un convento de carmelitas. Cuando se entreguen, una muchedum-

1. Enrique Castro Delgado (1907-1964) formaba parte del Comité Central del Partido Comunista en 1936. Fue el primer comandante del Quinto Regimiento yen diciembre se le designó director general de Reforma Agraria. Tras la guerra se exilió en la URSS, donde se desengañó del comunismo. Regresó a España a finales de los años cincuenta. Publicó libros anticomunistas tan notorios como *Hombres made in Moscú* (Caralt,
Flarreinna 1 91;31 v CAnan r-h.,5-lí In ti pn M,m-,5 1 eKriN

bre de milicianos anarquistas se precipitará sobre los militares apresados y los asesinará. En Guadalajara, el 22 de julio, cuando una columna de 10.000 hombres con abundante apoyo miliciano corre a sofocar el alzamiento, las milicias penetran en el cuartel de Aerostación, donde se habían refugiado los sublevados, y asesinan a todos los jefes y oficiales. Cuando la columna Durruti llegue a Lérida, hacia el 28 de julio, asesinará a *todos* los jefes, oficiales y suboficiales detenidos, sin distinción de rango ni responsabilidad. Tres días antes, en Albacete, los milicianos habían fusilado sin juicio al teniente coronel Enrique Martínez Moreno, partidario del alzamiento, pero junto a él matarán también a un centenar de oficiales subordinados. Más trágico aún es el caso de los generales López Ochoa y Capaz, que habían permanecido en Madrid sin sumarse al alzamiento, pero que fueron igualmente asesinados por los milicianos. Las matanzas de militares se convierten así en un capítulo recurrente del Terror rojo. En Mahón, el 3 de agosto, son asesinados 90 jefes y oficiales en la fortaleza de La Mola. En Valencia se seguirá ejecutando durante toda la guerra a militares presos. La Guardia Civil será otro objetivo del Terror, generalmente bajo la simple sospecha de escasa lealtad. En Reinosa (Cantabria) se encierra con engaños en el Ayuntamiento a 19 guardias civiles que serán asesinados. El 28 de julio es en Ronda (Málaga) donde se asesina a 12 guardias civiles y de asalto. El 6 de agosto en Huélago (Granada) son asesinados los 26 guardias civiles del puesto. En Madrid, e120 de noviembre de 1936, son asesinados 53 guardias.

Estas matanzas de militares no pueden entenderse desde el habitual cliché de una República legal y legítima que se protege contra la traición de un ejército rebelde: no había tantos traidores. Hay que entenderlo como lo que cabalmente fue: un episodio deTerror revolucionario dirigido contra un estamento previamente designado corno «enemigo de clase». Designado, ¿por quién? Indudablemente, por los partidos de izquierda del Frente Popular, que desde 1931 apuntaban hacia el Ejército, en tanto que institución, como sostén de un régimen "explotador e injusto". En su lugar proponían un «ejército democrático» y «popular» purgado de elementos reaccionarios. Ese es el ejército que los partidos de Frente Popular tratarán de confor-

mar desde el mismo 18 de julio, bajo mando político y con militares ideológicamente afines.

En Madrid las unidades milicianas aparecen conformadas y bajo mando militar en la misma tarde del 19 de julio, en torno al Cuartel de la Montaña: la unidad del teniente coronel Mangada, formada por los mineros asturianos desviados por Aranda y por militantes socialistas; la del teniente coronel Marina, socialistas; la del teniente coronel Lacalle, anarquistas; la del comandante Sánchez Aparicio, socialistas; la del comandante Fernández Navarro, sobre la base de milicias comunistas que pronto se convertirán en el «quinto regimiento». Tienen, pues, mando militar, pero sus efectivos se organizan según criterios políticos. En Barcelona, el comité de milicias organiza la primera columna el 24 de julio y la pone bajo el mando del anarquista Durruti, auxiliado por el comandante Pérez Farrás: son 3.000 hombres, en su mayor parte milicianos anarquistas. Las columnas formadas en los días siguientes también tendrán una composición mayoritariamente política y estarán sometidas a la dirección de las organizaciones políticas y sindicales.

Para estas milicias, como para los líderes políticos que las mandan, el Ejército es una institución que debe desaparecer. Esa convicción ideológica es determinante para entender por qué el Gobierno del Frente Popular prefirió armar a los milicianos. Ya hemos visto la interpretación que hacía Azaña sobre la historia nacional, donde al Ejército se le atribuía un lugar decididamente pernicioso. La posición de Azaña no dejaba de ser racional, como racional fue la reforma militar afrontada en el primer bienio republicano, pero lo que el azañismo interpretaba como reforma de calado histórico, los socialistas lo veían como venganza contra una casta odiosa. A la hora de buscar responsabilidades, no puede desdeñarse la permanente campaña del PSOE contra los militares, desde el mismo nacimiento de la República, con recriminaciones barriobajeras que resultaban inconcebibles en un partido representado en el Gobierno. No puede desdeñarse esa campaña porque el propio Azaña reprobó la conducta del PSOE hacia el ejército: «Me contraría enormemente —escribe en referencia a un grosero artículo de *El Socialista* publicado el 31 de julio de 1932— que se ocupen para nada de cosas militares;

pero que se acuerden de ellos para escribir animaladas, yen el periódico de un partido que está en el Gobierno [...] . En cuanto entran en juego estas cosas, no se sabe hasta dónde pueden llegar »[1].

De los 7.624 mandos militares en zona republicana el 18 de julio, unos 1.500 fueron fusilados

Pronto se supo hasta dónde llegaron. En conjunto, para las fuerzas de tierra, mar y aire, algo más de la mitad de los oficiales del Ejército que quedaron en zona republicana fueron represaliados, según el estudio de Ramón Salas Larrazábal. A partir de una cifra inicial de 7.624 mandos militares en zona republicana el 18 de julio, unos 1.500 fueron fusilados, un número semejante fue condenado o encarcelado y aproximadamente un millar huyó o buscó refugio en las embajadas [2]. La represión sobre el estamento militar fue un objetivo primordial del Terror rojo. No será el único.

1. Azaña, *Diarios 1932-33,* Crítica, Madrid, 1997.

2. Ramón Salas Larrazábal: *Las cifras exactas de la guerra civil,* Drácena, Madrid, 1980. Precisemos que estas cifras no avalan la tesis de que el Frente Popular se quedó sin mandos militares: al número de oficiales partidarios del Frente Popular, que los había, se sumaron alrededor de 2.000 que reingresaron en el Ejército para la guerra.

CAPíTULO II

EL PODER DE LAS MILICIAS

VIDARTE había asegurado a Casares que los socialistas disponían de mandos y organización para que la medida de «armar al pueblo» no condujera a una situación de inseguridad y desórdenes.

Era falso. Con miles de activistas transformados en hombres armados, las milicias se convierten en un poder de hecho y su objetivo, en pura mentalidad revolucionaria, será la aniquilación del enemigo político en la propia retaguardia. En Madrid, tras la toma del Cuartel de la Montaña, los milicianos habían obtenido 100.000 fusiles: más fusiles que combatientes. Desde el día anterior funcionaban ya cinco unidades de milicias organizadas, pero ni los socialistas ni los anarquistas las movilizarán para el combate. Sólo las milicias comunistas estaban dedicadas al esfuerzo de guerra[1]. De hecho, hasta el 27 de septiembre, ya caído Toledo, no se movilizará militarmente a las milicias socialistas y anarquistas. ¿Qué hacían hasta entonces? Dedicarse a la represión. Exactamente lo mismo está ocurriendo en Barcelona: en las columnas de mando anarquista que avanzan sobre Aragón militan 18.000 milicianos y 4.000 soldados regulares, pero en Cataluña los gubernamentales disponían de 100.000 fusiles. ¿Qué se hacía con los 78.000 fusiles que no fueron al frente? Matar «fascistas». Ha comenzado la caza.

---

1. R. de la Cierva, *Historia esencial de la guerra civil española,* op. cit., p. 339.

La caza del hombre

El Terror comienza, en efecto, con la caza del hombre. Esta primera fase del Terror se ejecuta con apoyo de las instituciones del Estado, pero no es ni ciega ni desorganizada. Las bandas de milicianos nacen de las agrupaciones locales o de barrio de los partidos de izquierda, así en las grandes ciudades como en los pueblos. Y su violencia se dirige muy concretamente hacia enemigos identificados de antemano por la prensa y por los líderes revolucionarios. En función de esos enemigos es posible describir tres líneas de acción en el Terror. Una, de clase: aniquilación de aristócratas, de religiosos, también de burgueses; pero por el camino caerán otros muchos cuyo único delito era poseer una pequeña propiedad agrícola o un comercio. Dos, política: persecución y muerte de los enemigos políticos en un ancho arco que va desde los partidos falangistas, tradicionalistas o monárquicos, hasta los republicanos de derecha; pero también serán asesinados republicanos de centro, incluso algunos que se habían manifestado contra la sublevación militar y, por supuesto, fieles católicos cuya fe era vista por las milicias como una actitud antirrepublicana o «fascista». La tercera línea de acción responde a motivaciones individuales, típicas de las guerras civiles: querellas personales que se saldan al amparo de la fiebre de sangre desatada en las retaguardias.

La violencia se dirige hacia enemigos identificados de antemano por la prensa y los líderes revolucionarios

En muy pocos días caen miles de personas en todo el país. Especialmente en las zonas rurales o en ciudades pequeñas, donde todo el mundo se conoce, el inicio de la guerra actúa como detonante inmediato del crimen. Las milicias acuden a buscar al cura, al notario, al militante católico o al guardia civil. Las víctimas son asesinadas sin mayor trámite, con alguna frecuencia junto a sus propias familias. Pero si esto es así en el campo, las víctimas no están más seguras en las grandes ciudades, donde las milicias, muy numerosas y bien armadas, actúan con entera libertad. Comienza el ritual de los «paseos» la víctima es cazada en su domicilio, arrojada al exte-

rior, «paseada» por las calles y conducida a una improvisada cárcel o a un lugar cualquiera —una carretera, las puertas de un cementerio, un descampado-- donde es asesinada. Las prisiones improvisadas en conventos, c.cuelas o dependencias municipales pronto se verán atestadas; en miles de casos serán la antesala de la muerte. Desde muy pronto reciben el nombre de «checas», al estilo soviético.

Comienza así un rosario de crímenes que se extiende por toda España. La mecánica siempre es la misma: las milicias del Frente Popular, armadas por iniciativa gubernamental, aplican su violencia sobre las personas designadas como enemigas, mientras las instituciones formales de orden público asisten al proceso desde la impotencia o, en otros casos, desde la complicidad. En Gijón, el 20 de julio, los hermanos Isaac y César Braga Rodríguez son asesinados en su domicilio. Como ellos, varios cientos de españoles están cayendo cada día en todas partes. Algunos tratarán de resistirse: en Pozoblanco (Córdoba), un derechista acosado por los milicianos, Francisco Delgado López, aguantará en su casa tres días defendiéndose con una escopeta de caza. Pero, en general, poca resistencia pueden ofrecer a las milicias unas víctimas inermes. Y los milicianos, conscientes de su recién adquirido poder, intensifican la represión. El 25 de julio, en Morón de la Frontera (Sevilla), asesinan a 25 personas. El día siguiente los asesinados son 14 en la misma provincia, en la localidad de Utrera. En la primera semana de agosto morirán 128 personas en Jaén. Son sólo unos pocos ejemplos de la convulsión de muerte que llena el país[1]. Según los datos de Martín Rubio, las víctimas del Terror rojo se cuentan por miles en los trece días que van desde el 18 de julio hasta el final del mes. Las cifras son escalofriantes. En Madrid son asesinadas 726 personas. En Aragón, 488. En Cataluña, 730. En las regiones de Levante, Murcia y Baleares, 467. En Andalucía, 478. En Extremadura, 67. En La Mancha, 409. En Asturias, 218. En Santander, 44. En el País Vasco, 79. Martín Rubio rescata de la *Causa General* el testimonio, sumamente ilus-

1. Los casos concretos citados en este y en los siguientes párrafos no pretenden, como es natural, completar una relación exhaustiva de los crímenes; simplemente son ejemplos, a título de ilustración, de la práctica del Terror rojo.

trativo, del médico forense del juzgado de instrucción de Gijón, distrito de Oriente, Honorio Manso Rodríguez:

> Y así seguimos un día y otro día, encontrándonos al acudir todas las mañanas al depósito judicial con verdaderos montones de cadáveres [...]. El día 14 de agosto con 91 cadáveres, el 21 de mismo mes con 142, el día 27 con 32, el 28 con 20, el 30 con 47, el 6 de septiembre con 25, y otros muchos días con cifras superiores a 10 cadáveres [...]. Todavía no constituyen la totalidad de las personas asesinadas en Gijón, pues una tercera parte, o más, de los asesinados fueron arrojados al mar [...]. Por último se dio orden terminante de que no fuesen conducidos más cadáveres al depósito judicial, sino que fuesen llevados directamente al cementerio '.

Es importante reparar en las fechas: un mes después del Alzamiento, el hundimiento del orden público en la zona republicana todavía es un hecho cotidiano. Las instituciones legales de la II República carecen de medios para frenar la ola de violencia —pero esa violencia está siendo ejecutada por las milicias de los partidos que sostienen al Gobierno de la República, milicias a las que el propio Gobierno ha armado y que, constituidas en comités de salud pública o bajo cualquier otra denominación, se han lanzado al exterminio del enemigo. A este respecto es muy interesante el testim):" o del fiscal republicano García Torres, que retrata la situación en Valencia:

> En la segunda decena de Agosto ya estaba montada la máquina judicial con los nuevos elementos. Triste es confesarlo; pero el caso es que, por debilidad, impotencia e imperativo de las circunstancias, la función de los jueces *se* reducía a recibir las fotografías y partes de cientos de cadáveres encontrados por las afueras de la ciudad y por los caminos y carreteras de la provincia. Asesinatos y robos por doquier. Y para colmo de tal situación se constituyó en la capital un llamado Comité de Salud Pública, cuyos componentes actuaban dando ciento y raya a los checas de los pueblos. Las violaciones, robos y asesinatos so pretexto del fascismo eran el pan nuestro

1. A. D. Martín Rubio: Paz, *piedad, perdón . . y verdad* op. cit., p.330. El documento citado está en el Archivo Histórico Nacional, *Causa General* leg. 1.338.

> de cada día; surgían las comisarías Antifascistas aprendiendo pronto a robar, asesinar, violar, incautar impunemente, pues raras excepciones podrían consignarse de hombre que, sintiendo el momento histórico, se dedicara al restablecimiento del orden; nadie estaba tranquilo en su fábrica, taller, comercio o labores de las tierras, y mucho menos en su domicilio particular. Ni siquiera se estaba tranquilo en los centros oficiales del Gobierno Civil que sacaban a los funcionarios y se les asesinaba; de la Jefatura de Policía, a los agentes, pues ni en uno ni en otra, se ejercía función alguna de autoridad. Todo lo acordado era letra muerta, porque ni mandaban ellos, ni el comité del Frente Popular, ni las organizaciones de milicias, o guardias antifascistas... ni siquiera el titulado Comité de Salud Pública, porque por encima de todos estaban las cuadrillas de ladrones y asesinos que enrolados en todos esos organismos disponían de vidas y haciendas, que no obedecían más que al mandamás que las capitaneaba '.

Junto a los asesinados, muchos miles son encarcelados en prisiones oficiales o improvisadas. En las ciudades portuarias numerosos barcos son habilitados al efecto. En Málaga será tristemente célebre el barco-prisión *Marqués de Chavarri*. Muchas de esas cárceles flotantes, como otros centros de reclusión, serán asaltados y se asesinará a los presos, según veremos más adelante. En otros lugares, los reclusos podrán mantenerse con vida hasta el final de la guerra. Por ejemplo, en junio de 1937, cuando las tropas de Franco entraron en Bilbao, donde los asesinatos no habían alcanzado el nivel masivo de otras ciudades, fueron puestas

En las ciudades portuarias son numerosoudlbadesbarcos habilitados como prisiones

1. Mantenemos la grafía original, no siempre correcta, del escrito citado. El abogado republicano Enrique García Torres, de Valencia, había ocupado el cargo de fiscal en el Tribunal Popular número 1 de esa capital. Este fragmento procede del largo informe que García Torres elevó al Ministro de Justicia el 16 de agosto de 1937. La edición pública de la *Causa General* lo recoge dentro de los anexos al capítulo «Justicia Roja» (pags. 349 y ss.), numerado como Anexo XI, números 11 Ay siguientes. Volveremos a citar este testimonio, porque es elocuente sobre la impotencia de muchos profesionales de la Justicia que apoyaron de buena fe al Frente Popular y se vieron completamente desbordados por la marea revolucionaria. García Torres, que había nacido en 1886, fue juzgado y fusilado por los vencedores el 28 de marzo de 1941 en Paterna (Valencia).

n libertad nada menos que 2.000 personas —es el testimonio de A.zaña— que estaban encarceladas bajo sospecha de ser -'-lañas

El control de los «incontrolados>,

(:dando se escribe el relato de estos hechos es norma aludir a su carác - ter «incontrolado». La propia *Causa Generalrecurre* al término «anár- q uico» para calificar esta primera etapa delTerror rojo. Pero son expresiones ambiguas, porque connotan una cierta ausencia de responsabilidad política, cuando la realidad —yen esto no le falta razón a *12, Causa General—es* que el exterminio indiscriminado del enemigo fue consecuencia directa de una decisión del Gobierno: la de armar a las milicias, decisión ejecutada inmediatamente por líderes políticos provistos de autoridad formal. Líderes y autoridades a los que después veremos, en no pocos casos, dando la órdenes de ejecución. Qué está ocurriendo? En líneas generales, lo que ha ocurrido es que 13 decisión de armar a las milicias ha creado un nuevo poder. Las autoridades formales de la República que se avengan a la nueva situación podrán mantener su liderazgo; las que no, serán desplazadas por la presión revolucionaria y sustituidas por ₒtris A este respecto es ejemplar el caso de Cataluña. Quien sofocó aquí la sublevación militar no fueron los milicianos armados, sino la Guardia Civil, obediente a la autoridad formal de la Generalitat, el gobierno autónomo catalán. Las milicias anarquistas actuaron, frecuentemente, como simple acompañamiento de las fuerzas de orden público; ello no les ahorrará bajas sensibles, como la del sindicalista Ascaso, pero su participación distó de ser decisiva'. Sin embargo, acto seguido

1. Francisco Ascaso (1901-1936) era uno de los más célebres pistoleros anarquistas desde los años veinte. Cofundador de la FAI y, después, del aún más radical grupo «Nosotros», exilió durante la dictadura de Primo de Rivera y fue detenido dos veces bajo los gobiernos del primer bienio de Azaña. En 1934 fue elegido secretario general del Comité Regional de la CNT en Cataluña. Murió el 20 de julio de 1936, durante el asalto al cuartel de las ,',tarazanas. Una de las columnas anarquistas que partieron al frente aragonés llevó su n;).cobre. No hay que confundirlo con el también cenetista Joaquín Ascaso, primo suyo, itc‘ durante la guerra presidir) rd conseio anarcw;indicalista de Armón.

el consejero de Orden Público de la Generalitat, Federico Escofet, cumplió la orden de armar a los milicianos, acción que incluía el libre saqueo de las armerías de Barcelona. Resultado: los anarquistas, así armados, desplazan inmediatamente a Escofet, acusado de haber protegido a personalidades moderadas y a algunas congregaciones religiosas[1]; los milicianos de la CNT/FAI se hacen con todo el poder y desatan una política deliberada de Terror.

La represión anarquista en Cataluña será brutal: 50 asesinatos diarios —sin causa— en la primera semana, hasta 511 asesinados en fecha 5 de agosto. Las milicias actuarán con una arbitrariedad inconcebible, como atestigua el caso de unos novios que fueron detenidos mientras contraían matrimonio; en el mismo acto fueron asesinados los novios y el sacerdote. La cifra de iglesias saqueadas e incendiadas sólo en Barcelona asciende a 268. El número de sacerdotes y religiosos asesinados en Cataluña, en las primeras semanas de la guerra, suma 651 víctimas; después habrá más. En Lérida, a partir del 20 julio, fecha en la que son asesinados cinco sacerdotes y tres jóvenes en la vía pública, circulará permanentemente una camioneta para recoger los cadáveres de las calles. Las posibles víctimas, cuando pueden, escapan en masa: nadie ignora lo que puede esperar del régimen. La atmósfera de represión generalizada no es un secreto para nadie, y tampoco para el poder republicano: Azaña da crédito a la información de que el número de personas fugadas de Cataluña asciende a 40.000[2]. Pero no puede considerarse «incontrolado» a un Terror que gozaba de plena cobertura institucional.

1. Federico Escofet Alsina (1898-1987) era capitán de Caballería. Nacionalista radical de la órbita de Esquerra, participó en la revolución de 1934 y fue condenado a muerte por ello, pero la pena no se ejecutó y resultó indultado cuando el Frente Popular se hizo con el poder en febrero de 1936. Cuando estalló la guerra era el responsable de Orden Público del gobierno autónomo catalán, y a él hay que atribuir el haber sofocado la rebelión en Barcelona. Pero corno no desconocía las intenciones de los anarquistas, ayudó a algunos religiosos a huir al extranjero. Los anarquistas de la CNT/FAI le acusaron por ello de traicionar a la República y fue cesado de su cargo. La Generalitat, temiendo por su vida, le envió a Francia. Volvió en 1937 y, tras combatir en diversas operaciones, fue nombrado ayudante de la monarquía.
dante del presiden te Companys. Tras la guerra se exilió en Bélgica. Volvió a
España

2. *Obras Completas,* **IV, p.** 640, nota del 29 de junio de 1937.

Asimismo, la presencia de altos cargos políticos al frente de las milicias va a ser una constante. En Almería, por ejemplo, fueron los diputados Pradal y Romero los que desplegaron a los milicianos en torno a los cuarteles, para cerrar la salida del ejército. En Granada hacen lo propio los diputados Pretil y Ortega. Cuando una columna minera venga desde Asturias hasta Madrid, el 18 de julio (la columna que había expedido el astuto Aranda), su cabeza será el militante revolucionario Francisco Martínez Dutor junto a un comandante de Estado Mayor, Juan Ayza, del círculo de Azaria. En Albacete, donde los sublevados habían quedado aislados, se presenta una fuerte columna republicana con abundancia de milicias; en cabeza, tres diputados del Frente Popular junto al comandante que manda la fuerza. En Badajoz, los mismos diputados socialistas que habían azuzado motines revolucionarios en los años anteriores aparecen ahora al frente de cuatro batallones de milicianos socialistas. Aquí, por cierto, las fuerzas revolucionarias forman junto a unidades de Asalto y Guardia Civil, sus antiguos represores, bajo las órdenes del coronel Puigdendolas[1]. El número de militares y guardias civiles que aprovecharán la confusión para pasarse al bando nacional se cuenta por centenares.

La presencia de altos cargos políticos al frente de las milicias va a ser una constante

Autoridades son igualmente los gobernadores civiles y los alcaldes que se ponen a la cabeza de los milicianos. En Ciudad Real, es el gobernador civil, Germán Vidal, quien ordena el 25 de julio la incautación de todas las iglesias y conventos y suspende el culto religioso, permitiendo el saqueo de los templos; el obispo de la diócesis, Esténaga, será asesinado un mes después. En Alcázar de San Juan parece decisiva la participación del alcalde en el asesinato de varios religiosos franciscanos y trinitarios: los guardias que los custodia-

1. El caso de Ildefonso Puigdendolas Ponce de León (escrito en otros lugares Pugdendola) es dramático. Nadie sabe si su voluntad hubiera sido unirse al alzamiento. Convertido en jefe militar de caóticas unidades de milicianos, terminó muriendo asesinado por éstos en el frente de Madrid, en octubre de 1936.

ban, que habían rechazado inicialmente a los milicianos, terminaron entregando a los presos el 26 de julio, cuando las milicias volvieron con una orden sellada por el alcalde. En Caudete (Albacete), es asimismo el alcalde quien entrega a 13 agustinos a un destacamento de comunistas que venían de Valencia; los religiosos serán fusilados el 29 de julio. Son sólo tres casos entre otros muchos. Es difícil saber en qué ocasiones estas autoridades actuaron bajo una deliberada voluntad homicida y cuándo lo hicieron por miedo a las represalias de los milicianos; de hecho, no faltan los casos de alcaldes asesinados por negarse a obedecer a las milicias. Lo que resulta evidente, en cualquier caso, es que el poder político formal se doblegó ante una fuerza creada por el propio poder político formal; con ello avaló *de facto* los crímenes.

Origen de la fuerza miliciana

¿Tan terrible era esta fuerza como para sojuzgar a las instituciones? Innegablemente, sí. Esta fuerza la ha armado el Gobierno. La encabezan señores diputados o reconocidos líderes populares, escoltados por militares fieles al Frente Popular. Y pronto constituye una muchedumbre temible: en Madrid, la cifra de milicianos asciende a 25.000 personas armadas en las primeras semanas; en Cataluña, fuentes anarquistas dan el número de 22.000 milicianos en Cataluña y Aragón; Valencia ha enviado a los frentes 9.000 milicianos[1]. Pero estas cifras atañen sólo a los contingentes que acuden a los frentes. En las retaguardias, la situación es alucinante: en torno a 50.000 personas armadas en Madrid, unas 60.000 en Cataluña. En una provincia pequeña como Jaén, el Frente Popular dispondrá de 10.000 milicianos (la mitad, de las Juventudes Socialistas Unificadas) que actuarán indistintamente en los frentes y en la retaguardia. Hacia octubre de 1936, los frentes se estabilizan y se ha encuadrado ya a las unidades milicianas: unos 150.000 efectivos; pero siguen siendo muchos menos que el número de armas repartidas el 19 de julio.

1. **R.** de la Cierva, *Historia esencial...*, op. cit., p. 132.

Pasarán meses hasta que el Gobierno del Frente Popular controle el paisaje que él mismo ha creado.

¿Qué es esta fuerza miliciana, cómo ha podido acumular tanto poder en tan escasas horas? ¿De dónde han salido las milicias? Han salido de las agrupaciones locales y de distrito de los partidos y sindicatos revolucionarios. Han podido acumular tanto poder porque esos partidos y sindicatos —que, recordémoslo, forman parte de la estructura de poder gubernamental— han avalado su constitución y armamento. Pero también porque las milicias no surgen de la nada el 18 de julio, sino que venían diseñándose y, en ocasiones, actuando desde varios meses atrás. Las milicias formaban parte del proyecto revolucionario de socialistas y comunistas —y también de anarquistas, aunque con otro concepto de organización— desde muy temprano; la guerra las convertirá en una realidad masiva. Y aquí es preciso contar su historia, siquiera sea brevemente, porque sin ella resulta incomprensible este episodio de la guerra civil y del Terror rojo español.

En torno al Partido Socialista habían comenzado a formarse grupos insurreccionales al menos desde 1931, cuando llega a España el italiano Fernando de Rosa precisamente con esa misión[1]. Estos grupos crecen en la órbita del ala «bolchevique» del partido, nucleada en torno a Largo Caballero y de importancia creciente —hasta terminar siendo mayoritaria— a lo largo de los años republicanos. Tras la derrota electoral de noviembre de 1933, el PSOE organizó un comité para planificar una insurrección armada. Ese comité, que empezó a funcionar en febrero de 1934, tenía por objeto la acumulación de armas, el aprovisionamiento de fondos, la propagación de una mentalidad de guerra civil en la sociedad, la organización de

El PSOE organizó en febrero de 1934 un comité para planificar una insurrección armada

1. Fernando de Rosa permaneció en España durante todos los años de la II República. Participó en la revolución de 1934. El ugetista Amaro del Rosal le acusará de haber mantenido un comportamiento ambiguo en esa ocasión *(1934: El movimiento revolucionario de octubre,* Akal, Madrid, 1984). Fernando de Rosa morirá en el frente, en la sierra de Guadarrama, el 16 de septiembre de 1936.

milicias y la infiltración de un red golpista en el ejército. El comité lo presidía Largo Caballero y en él figuraba, entre otros, Santiago Carrillo por las Juventudes Socialistas. El plan estaba perfectamente elaborado. En la sede madrileña del sindicato socialista UGT se convocó a activistas de toda España para explicarles el sistema de intercambio de instrucciones y las correspondientes contraseñas. En la primavera de 1934, los comités provinciales recibieron el esquema de organización de las «Milicias Proletarias» una estructura piramidal, propiamente paramilitar, de grupos, compañías, secciones, pelotones y escuadras, cada una de éstas últimas con diez hombres. Las instrucciones del comité precisaban que estas escuadras se formarían con los elementos mas decididos, irían armadas y obedecerían a dos jefes que se encargarían de su formación militar. Tampoco faltaba una sección logística con expertos en electricidad, teléfonos, alcantarillados y gas. Y, por supuesto, se contemplaba la inmediata represión sobre los elementos más destacados de las derechas y, en especial, de las fuerzas armadas, que debían ser detenidos y, en su caso, «suprimidos». El plan ambicionaba extenderse a toda España mediante un sistema de juntas: la Junta revolucionaria de la provincia debería constituir juntas locales en cada pueblo con personas de absoluta confianza. Estamos hablando —hay que subrayarlo— de la primavera de 1934, cuando la hipótesis de una guerra civil era, para la mayoría de los españoles, sólo una lejana pesadilla.

El Partido Socialista no estaba sólo en esta tarea. Según la historia oficial del Partido Comunista, *Guerra y revolución en España, el* PSOE había aprobado un «programa de acción» de consuno con el PCE. Al calor de ese pacto nacieron las Alianzas Obreras, lideradas por el PSOE, con participación de la CNT, comunistas disidentes y, sólo a última hora, el PCE. Estas Alianzas Obreras sólo funcionarán realmente en Asturias; eran el embrión de un ejército revolucionario que en las jornadas de 1934 encuadrarán a 30.000 hombres, ya bajo el nombre de Ejército Rojo. En Asturias fracasarán, pero la experiencia dará nacimiento a las Milicias Antifascistas Obreras y Campesinas (MAOC), formadas por iniciativa comunista.

Las MAOC no son las únicas unidades armadas para la guerra civil. Antes incluso de las elecciones de 1936, los anarquistas ya han